



**siglo veintiuno editores argentina, s.a.**  
Guatemala 4824 (C1425BUP), Buenos Aires, Argentina

**siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.**  
Cerro del Agua 248, Delegación Coyoacán (04310), D.F., México

**siglo veintiuno de españa editores, s.a.**  
Sector Foresta n° 1, Tres Cantos (28760), Madrid, España

FAHCE - BIBHUMA

N° Inv: 64849

Sig. Top: 982.08 NOV 21

Fecha de alta: 11.8.11

Marcos Novaro  
Historia de la Argentina. 1955-2010. - 1a ed. - Buenos Aires : Siglo  
Veintiuno Editores, 2010.  
320 p. ; 23x16 cm. - (Biblioteca Básica de Historia / dirigida por  
Luis Alberto Romero)

ISBN 978-987-629-144-6

1. Historia Argentina. I. Título

CDD 982

Edición al cuidado de Yamila Sevilla y Teresa Arijón

© 2010, Siglo Veintiuno Editores S.A.

Diseño de colección: tholón kunst

Diseño de cubierta: Peter Tjebbes

ISBN 978-987-629-144-6

Impreso en Grafinor // Lamadrid 1576, Villa Ballester,  
en el mes de noviembre de 2010

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723  
Impreso en Argentina // Made in Argentina

## Índice

<b>Introducción</b>	9
<b>1. La Revolución Libertadora: el fracaso de la restauración conservadora</b> <i>procesos enterales</i>	13
¿Integrar o erradicar al peronismo? ¿Restablecer el orden social o la libertad política? Dos rasgos persistentes: igualdad social y crisis de legitimidad política. Lo que sí cambió con la Libertadora: crisis del estado y polarización de clases. La acción de la Resistencia y la reorganización del sindicalismo. Las tácticas de Perón y el fracaso de la Constituyente. La causa decisiva del fracaso: la división del radicalismo	
<b>2. Frondizi, entre la proscripción y la integración</b> <i>experiencia desarrollista</i>	39
El entusiasmo desarrollista y los "factores de poder". Logros económicos y asedio político. Los complejos efectos sociales de la modernización: "los ejecutivos" y "las villas". La caída de Frondizi y el gobierno de José María Guido	
<b>3. Arturo Illia: un gobierno moderado en la escena de la revolución</b>	65
Una tregua demasiado frágil. Illia en funciones: una nueva versión de políticas conocidas. La lucha de ideas y el nuevo rol de la juventud. La derrota de Vandor y el golpe	
<b>4. La Revolución Argentina: de la suma del poder a la impotencia</b>	89
Onganía y el tiempo económico. Levingston y el tiempo social: inflación y violencia. Lanusse y el tiempo político: un intento tardío de contener la revuelta	

## 8. La conquista de la democracia y el agravamiento de la crisis

Alfonsín fue el protagonista de una transición que la ciudadanía vio como la solución de los males acumulados durante décadas de inestabilidad institucional y violencia. En este marco, el líder radical lograría derrotar al peronismo, al tiempo que contribuiría a cargar a la joven democracia con expectativas muy difíciles de satisfacer. Una de las prioridades del nuevo gobierno fue juzgar a los principales responsables del terrorismo de estado. La creación de la Conadep y el juicio a los ex comandantes fueron contundentes logros de esta política. Pero no impidieron que Alfonsín quedara pronto atrapado entre las presiones del movimiento de derechos humanos por ampliar los juicios y las de los militares por detenerlos. En los demás terrenos, dificultades de este tipo tardarían aún menos en aparecer. En el plano sindical, la Ley de Reforma impulsada por el Ejecutivo fue rechazada en el Senado. Y en el económico, aunque Alfonsín buscó conciliar el control de la inflación con el aumento del empleo y los salarios, para probar la comunión entre democracia y justicia social, más allá de un breve período del Plan Austral los resultados fueron decepcionantes. El peronismo, mientras tanto, atravesó un proceso de renovación que lo relegitimaría ante la sociedad. Pero en el contexto de una intensa competencia electoral, la cooperación entre los partidos resultó impracticable, y esto, sumado a sublevaciones militares, protestas gremiales y un desfavorable contexto internacional, conduciría a la hiperinflación y a la entrega anticipada del poder a quien fue electo presidente en 1989.

### La primavera alfonsinista

El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín logró triunfar allí donde tantos habían fracasado en las décadas anteriores: derrotó al peronismo en elecciones limpias, sin restricciones, reuniendo nada

menos que el 52% de los votos contra el 40% de Ítalo Lúder. Lo hizo convocando expectativas muy diversas bajo el abarcador manto de la promesa de reparar los daños causados por el Proceso, y en un sentido más amplio, los acumulados en décadas de inestabilidad, violencia y atropellos a la Constitución. Presentó a la UCR como el “partido de la democracia” y logró atraer a un electorado que excedía con creces al suyo tradicional, a derecha e izquierda del espectro, incorporando incluso votantes populares hasta entonces fieles al peronismo. Su campaña tuvo tres pilares fundamentales: investigar y juzgar los crímenes del terrorismo de estado, democratizar las instituciones y en particular los sindicatos, y reactivar rápidamente la economía para recuperar los niveles de empleo y salario. El común denominador fue la sobrestimación de las posibilidades de cambio, motivada no sólo por las necesidades políticas del nuevo gobierno sino por el optimismo generalizado de la sociedad, que quería creer que por fin era posible dejar atrás los males que venía padeciendo.

El terreno donde más velozmente pudo avanzar Alfonsín fue el de los juicios, aunque también allí el excesivo optimismo pronto provocó problemas, que se sumaron a los propios de un asunto particularmente conflictivo y complejo. Las evidencias sobre los crímenes, que habían ido acumulándose desde el final de la guerra de Malvinas con el descubrimiento de cientos de fosas comunes, las confesiones de algunos represores arrepentidos y la difusión de los testimonios de los familiares generaron un enorme apoyo a los reclamos de “verdad y justicia”. El entonces candidato radical, a diferencia de su par peronista, no aceptó la autoamnistía que la Junta dictó en su propio beneficio poco antes de los comicios. Y se esmeró en delinear lo que serían sus iniciativas al respecto: promover el juicio a los principales responsables de la represión ilegal como asimismo a las cúpulas guerrilleras, para equilibrar las cosas entre “los dos responsables de la violencia política”, y a un número acotado de represores paradigmáticos que hubieran cometido actos abiertamente ilegales (aunque no estaba claro a quiénes se incluiría en esta categoría, dado que todo el plan represivo tenía ese carácter), disculpando a aquellos que sólo habían “obedecido órdenes”. Alfonsín apostó así a una vía media: atender la demanda de justicia de los familiares de las víctimas y la expectativa más difusa de la sociedad al respecto, y lograr la subordinación de los oficiales en actividad, que en su mayoría serían disculpados aunque hubieran tenido alguna participación en la represión. Con este ánimo dictó, al asumir, un decreto en el que ordenaba el juzgamiento, por

las propias fuerzas armadas, de los miembros de las tres primeras juntas del Proceso y de otros altos oficiales.

### La fiesta de la democracia

La transición fue una fiesta de la democracia. La sociedad acompañó con gran entusiasmo el proceso electoral. Centenares de miles de personas asistieron a los actos de campaña, las marchas por los derechos humanos, las protestas sindicales y vecinales, y millones participaron de las campañas de afiliación y las internas de los partidos. El alborozo alcanzó su punto culminante con la asunción de Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, cuando la sociedad en pleno se volcó a las calles. En su discurso de ese día, el presidente identificó el fin de la dictadura “con la línea divisoria que separa una etapa de decadencia y disgregación de un porvenir de progreso y bienestar”.



Raúl Alfonsín habla a la multitud desde el Cabildo, 10 de diciembre de 1983. EFE. ■

El mencionado decreto se completó con el envío de un proyecto de ley para reformar el Código de Justicia Militar, que reconocía el fuero especial de que disfrutaban hasta entonces los uniformados pero habilitaba una instancia de revisión a cargo de las cámaras federales, que sería decisiva en caso de que el “autojuzgamiento” no diera resultado. Sucedió, sin embargo, que durante el tratamiento de este proyecto en

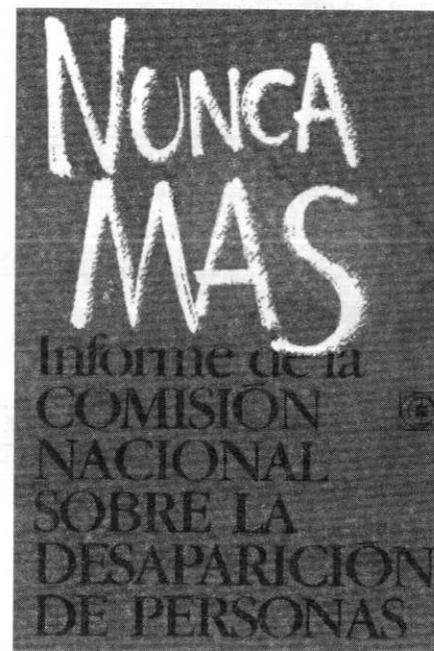
el Senado, el partido de los Sapag (el Movimiento Popular Neuquino que, como en los años sesenta, gobernaba en Neuquén) hizo pesar sus dos bancas, dada la renuencia a colaborar de la primera minoría en manos del peronismo (que reunía allí 21 bancas, contra 18 de la UCR), para excluir de la disculpa por obediencia debida todos los actos "atrocies y aberrantes". Ello permitía aumentar notablemente la cantidad de potenciales acusados y, lo que era aún más problemático, volvía muy difícil determinar su número. Cuando Alfonsín se negó a ordenar a sus legisladores, que eran mayoría en la Cámara Baja, que volvieran a votar el proyecto original, o a vetar él el cambio introducido, puso en evidencia su inclinación a ampliar las metas iniciales, y a confiar en que el problema se resolvería con el paso del tiempo.

En esa voluntad de ampliación influyeron dos hechos: que, por el momento, parecía que los militares no tenían forma de frenarla y que, debido a los pasos dados por el gobierno, las expectativas de la opinión pública respecto de los juicios habían aumentado. Y también los problemas que progresivamente se le presentaban al gobierno para implementar sus iniciativas en los demás terrenos. La victoria moral de la democracia sobre el autoritarismo que emanaría de los juicios era tan necesaria para consolidar el régimen como para mantener la ventaja del oficialismo frente a la oposición, que lo criticó desde un comienzo por los déficits económicos y sociales.



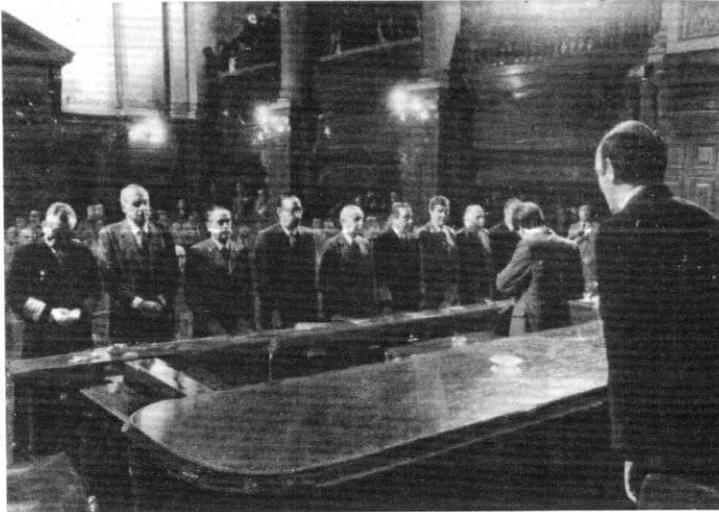
### La CONADEP

Formada también por decreto presidencial e integrada por intelectuales, artistas y activistas de derechos humanos (la presidió Ernesto Sabato y la integraban, entre otros, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú y la dirigente de la APDH Graciela Fernández Meijide), trabajó hasta septiembre de 1984 recolectando testimonios detallados de los familiares de desaparecidos y los sobrevivientes de la represión. Redactó el *Nunca Más*, un informe mucho más exhaustivo y desgarrador que el de la CIDH sobre el terrorismo de estado, que constituiría una invaluable fuente de pruebas para los juicios. El informe de la CONADEP también le trajo problemas inesperados a la política oficial, pues una "verdad ilimitada" no era fácil de compatibilizar con una justicia en cierta medida acotada: lo que se había considerado difícil de juzgar y castigar hasta ese momento se volvió, una vez conocido el informe, imposible de perdonar u olvidar.



Primera edición del informe *Nunca Más*, Buenos Aires, Eudeba, 1985. ▀

El proceso contra las Juntas se inició en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero a la vez muchos juzgados ordinarios iniciaron los suyos contra esos y otros acusados, debido a cientos de demandas de los familiares. En septiembre de 1984, la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, en cuya composición el gobierno se había esmerado tanto como en la de la Corte Suprema, le quitó al Consejo la causa contra los ex comandantes, puesto que ya era evidente que allí no avanzaría. Pero otras Cámaras del país, integradas en muchos casos por jueces del Proceso, no aceleraron ni unificaron las causas que les correspondían. Mientras tanto, se multiplicaron los planteos de oficiales en actividad o retirados, sacerdotes y políticos conservadores, e incluso sindicalistas y peronistas de derecha, que afirmaban que los juicios eran "la victoria de la subversión por otros medios". Contra la previsión oficial de que los juicios acotados permitirían separar a los más involucrados en la represión del resto de la oficialidad, las Fuerzas Armadas en pleno reivindicaban "lo actuado". Ése seguía siendo el único terreno en el que "habían triunfado" y un valioso factor de cohesión interna. Además, Alfonsín no parecía capaz de ofrecerles nuevos roles institucionales.



Los miembros de las Juntas escuchan la lectura del fallo que las condena, leído por el presidente de la Cámara Federal, León Arslanián, 9 de diciembre de 1985. Noticias Argentinas. Pool.

Las “hipótesis de conflicto” tradicionales quedaron invalidadas al avanzarse en la integración económica con Brasil y la solución pacífica de los conflictos limítrofes con Chile. En noviembre de 1984, Alfonsín convocó a un plebiscito para aceptar o rechazar el laudo arbitral del Vaticano por el Canal de Beagle, que mayormente favorecía al país vecino: aunque el “Sí” logró más del 60% de respaldo, el peronismo legislativo votó casi en bloque en contra e intentó agitar el avispero militar con la idea de que el gobierno estaba resignando soberanía. Por otro lado, aunque la administración radical se negó a firmar la paz con Gran Bretaña e insistió con operaciones en torno a Malvinas para elevar los costos de defensa de los británicos, los nacionalistas civiles y de uniforme lo acusaron de continuar la “vergonzante desmalvinización” emprendida por Bignone. Algunos fueron incluso más allá y denunciaron que el plan era “destruir a las Fuerzas Armadas”. La drástica reducción del presupuesto militar parecía darles la razón.

Por otro lado, los percances en la economía y el mundo del trabajo estuvieron a la orden del día desde los primeros meses de 1984. En ambos terrenos quedó de manifiesto que el antiguo “orden corporativo” —que Alfonsín creía tener el mandato de suprimir— estaba más vivo de lo que su contundente victoria electoral le había hecho pensar, y que los desequilibrios que le habían sido propios, en particular la crónica y

muy alta inflación, no sólo seguían presentes sino que se habían agravado. En suma, salvo en lo que respecta al actor militar, el “viejo orden” tardaba en desaparecer y no estaba para nada claro cómo podría instaurarse uno nuevo.

Esta circunstancia pronto se hizo evidente en el campo sindical. Y en ello se reveló también lo problemático de la posición general que el alfonsinismo asumía frente al peronismo. Recordemos que el presidente y su sector eran herederos directos de la tradición intransigente, la que tanto en tiempos de Frondizi como de Illia había intentado arrebatar de manos de Perón las banderas de la revolución nacional. Alfonsín creyó que la promesa de “democracia con justicia social” con que había logrado derrotar a Luder lo habilitaba para recoger tanto el legado de sus predecesores en la intransigencia, como el del jefe ausente de los derrotados, para “sintetizar lo mejor de las tradiciones políticas populares de la Argentina”. Y ello parecía ser finalmente factible, además, porque ahora se daban condiciones que antes habían faltado: había consenso democrático, no había veto militar, y el peronismo ya no podía invocar una legitimidad revolucionaria ni electoral inapelable. Había llegado el momento, por tanto, de concretar los cambios que una y otra vez se habían frustrado. Entre ellos, uno fundamental: la reforma del “modelo sindical” por la que habían trabajado durante la gestión de Illia varios de los más importantes funcionarios del nuevo gobierno, entre ellos Bernardo Grinspun, ministro de Economía, y Antonio Mucci, titular de la cartera de Trabajo.

Gracias a Viola, Liendo y Massera, el Proceso había preservado lo más importante de ese modelo. Pero, en opinión del alfonsinismo, había ayudado a volverlo una cáscara vacía. La “burocracia sindical”, además, había sido deslegitimada por la derrota electoral y por el “pacto militar-sindical” que Alfonsín había denunciado en la campaña y del que daba prueba la acelerada normalización de los gremios, que el nuevo gobierno interrumpió. Se trataba entonces de darle el golpe de gracia, de separarla del todo de las bases, y también de alejarla de los políticos peronistas, quienes podrían seguir actuando como una fuerza populista conservadora, capaz de ganar elecciones en provincias periféricas detrás de figuras tradicionales. Algo que esos líderes provinciales habían buscado con ansia, como vimos, en la época del neoperonismo.

De los once distritos donde había triunfado el peronismo (la UCR lo había hecho sólo en siete), la mayoría eran, en efecto, subdesarrollados y periféricos. Esa base “neoperonista” le había otorgado al PJ la primera minoría en el Senado. Pero sucedió que esos senadores y goberna-

dores no compartían la idea de Alfonsín. Y sacaron a los gremialistas, que antaño habían combatido, de un brete que podía conducirlos a su extinción. En su decisión pesaron los fracasos acumulados desde la muerte de Perón, y más que nada, su muerte misma: con el futuro del peronismo en peligro, cualquier nueva amenaza parecía mortal y fomentaba el sentido de cuerpo. Pero también pesó la confianza que les brindó el triunfo en tantas elecciones locales. Además, identificar a Alfonsín y su proyecto con los intentos de desperonizar a los gremios que se remontaban a la Libertadora les permitía poner entre paréntesis su “legitimidad formal”, en nombre de una “legitimidad real” que todavía encarnarían el PJ y el “pueblo peronista”. Y, por sobre todo, pesó un mal cálculo oficial respecto de la vilipendiada burocracia sindical: en rigor de verdad, era bastante más representativa de las bases que los grupos gremiales que apoyaron la reforma, aunque éstos fueran más democráticos en sus principios y planteos.

En concreto, la Ley de Reforma Sindical pretendía asegurar el pluralismo en la elección de autoridades y la toma de decisiones, otorgando representación a las minorías, mayor autonomía a las seccionales y los delegados por empresa, e imponiendo límites a la reelección de los dirigentes y un mayor control sobre el manejo de recursos. Fue aprobada en Diputados, pero cuando llegó al Senado, en marzo de 1984, la oposición en bloque del peronismo, a la que se sumaron los Sapag, determinó su rechazo. Fue un baldazo de agua helada para la estrategia general con que el gobierno buscaba consolidarse en el poder. Mucci fue desplazado y su reemplazante debió ceder a casi todas las pretensiones de los sindicalistas peronistas para regular la renovación de autoridades en los gremios. De esa situación resultaron, además de un buen número de reelecciones, algunas conducciones renovadoras que se alinearon con Los 25 o con Ubaldini, mientras que la izquierda y los radicales, que habían apoyado la iniciativa reformista, perdieron peso o a duras penas lograron conservar el que tenían.

El fracaso de Mucci probó que el peronismo seguía ejerciendo un poder suficiente para bloquear aquellos cambios que pudieran perjudicarlo, y que no se desmembraría. El intento de reforma incluso lo había unificado, sobre todo en el ámbito sindical: la CGT-Brasil, que reunía a Las 62 y Los 25, y la CGT-Azopardo, heredera de la CNT de Triaca, habían confluído para enfrentarlo en una CGT única con una conducción colegiada. Triaca, otrora paradigma del participacionismo, consciente de la necesidad de frenar la inflación, había sido también el más dispuesto a acordar políticas económicas con Alfonsín. Pero, dada

la prioridad que éste dio a la “lucha contra la burocracia”, “Azopardo” decidió reincorporarse a Las 62, olvidando su desconfianza hacia el método de “golpear y negociar”. Como consecuencia, a principios de septiembre, mientras el gobierno intentaba sentar a los gremios en una mesa de concertación con el empresariado para acordar precios y salarios y evitar la hiperinflación (en la segunda mitad de 1984 se llegaría a un ritmo del 1000% anual), la CGT unificada realizó su primer paro general para exigir la inmediata apertura de las paritarias, cerradas desde 1975. Su siguiente paso fue la formación del “grupo de los 11” con las entidades empresariales y la redacción conjunta de una lista de reclamos (los “20 puntos”, que luego serían 26), que incluía el aumento del gasto público, de los salarios y de los subsidios a la producción, la reducción de los impuestos y las tasas de interés, y la reactivación de la obra pública. El contradictorio listado se presentaba como la voz del “país real”, frente al “país legal” que encarnaba Alfonsín.

Alfonsín se había estado esmerando por cumplir otra promesa de campaña: “combatir la inflación y al mismo tiempo hacer crecer el salario real, y al mismo tiempo hacer crecer la economía”. De hecho, en la primera mitad de 1984 pareció encaminado a lograrlo: los índices de precios bajaron a alrededor del 12% mensual y los salarios se recuperaron hasta representar el 40% del PBI. Pero, contra lo que el propio Alfonsín y la opinión pública en general creían, los salarios de fines de 1983 se asemejaban más a los de fines del gobierno peronista que a los de 1981, y eran completamente insostenibles en medio de la crisis económica y fiscal. Ello se comprobó desde mediados de 1984, cuando el alza de precios les ganó la carrera por varios cuerpos y perdieron el terreno recuperado desde la guerra de Malvinas. Grinspun fue entonces obligado a firmar un acuerdo con el FMI, que otorgó créditos para pagar los intereses atrasados de la deuda y reforzar las reservas a cambio de un plan antiinflacionario, consistente en retrasar los aumentos de tarifas y salarios. Sin embargo, la inflación no se detuvo. Objetado ahora tanto por quienes creían que no se esforzaba en hacer el ajuste, como por quienes lo acusaban de haberse rendido a sus exigencias, en febrero de 1985 dejó su cargo.

#### **Ubaldini: “vocero” de los reclamos sociales**

Saúl Ubaldini cobró vuelo propio desde el conflicto por la ley Mucci: dejó de ser un simple vocero de Lorenzo Miguel para convertirse en el más destacado dirigente de la CGT. Pronto sería confirmado como su único

secretario general, desplazando a Triaca y a los demás integrantes de la dirección colegiada. Su pertenencia a un sindicato pequeño fue una ventaja y no un obstáculo para transformarse en el portavoz de reclamos sociales más amplios que los sindicales, los de los sectores populares informalizados y empobrecidos, y en el rostro de una estrategia de oposición inclemente que recuperaba la tradición de la Resistencia. Ubaldini tomó por costumbre afirmar que “la verdadera democracia era el pueblo feliz”, a lo que el presidente retrucó identificándolo como el máximo exponente de una “oposición irresponsable”.



Saúl Ubaldini, líder de la Comisión de Los 25. Revista *7 Días*, año XV, núm. 798, septiembre de 1982. ■

Su caída puso fin a la apuesta que había hecho Alfonsín para, con simples medidas reactivadoras, levantar las persianas de las fábricas cerradas y recuperar el empleo y los niveles de igualdad social previos al derrumbe. Ninguno de los problemas estructurales que lo habían provocado había desaparecido y algunos incluso seguían empeorando. Levantar esas persianas no era fácil, ante todo, porque no sólo ocultaban una caída circunstancial de la demanda. Las empresas carecían de capital, habían perdido sus proveedores y sus clientes. En consecuencia, los estímulos de Grinspun —protecciones comerciales, créditos baratos y aumentos salariales— hacían sobre todo subir los precios y convencían

a los eventuales inversores de que el dólar seguiría también subiendo, por lo que les convenía continuar fugando capitales (el total de fondos argentinos en el exterior llegaba ya a unos 43 000 millones de dólares, suma casi equivalente al total de la deuda externa).

Las tasas de interés internacionales también seguían por las nubes. México había dejado de pagar su deuda en 1982, y su incumplimiento endureció el trato que los bancos y gobiernos centrales ofrecían al resto de los deudores. El pedido de Alfonsín de renegociar los pasivos del país en condiciones que le permitieran crecer y aseguraran la estabilidad de su naciente democracia no tuvo, por ello, un gran eco. Llamativamente, recibió una respuesta más indiferente de Europa —incluidos los gobiernos socialdemócratas de España y Francia, con los que tenía mayor afinidad— que del presidente estadounidense Ronald Reagan. Éste buscó al menos restablecer los lazos rotos a raíz de la guerra y pretendió usar el ejemplo argentino para apuntalar el naciente proceso de democratización en el Cono Sur: Argentina debía mostrar a sus vecinos las ventajas de una vía alternativa entre las dictaduras y la revolución (el auge de la guerrilla chilena en ese momento preocupaba especialmente a Washington). De allí que el gobierno de los Estados Unidos se transformara en el más activo promotor de sucesivas disculpas por los retrasos en el pago de intereses y por el incumplimiento de las condiciones con que se aceptaban los cada vez más abultados créditos de los organismos financieros (el FMI, el Banco Mundial y el BID). Así, siguió incrementándose el monto adeudado (en pocos años superaría los 60 000 millones de dólares) pero se ganaba tiempo para buscar otra solución: que bajaran las tasas o bien que la economía argentina repuntara. Alfonsín, por su parte, había llegado a la conclusión de que ir abiertamente al *default* suponía un riesgo excesivo para la estabilidad política, por el agravamiento de la crisis y el aislamiento internacional que provocaría en lo inmediato. También tuvo que descartar la que fuera su propuesta de campaña en este terreno: distinguir la “deuda legítima de la ilegítima” y retrotraer las cosas al momento previo a la estatización de los pasivos empresariales. De intentarlo, se enemistaría con los capitalistas, cuyas inversiones estaba tratando de captar, y correría el riesgo de que le cedieran sus empresas quebradas y la economía terminara de derrumbarse. De modo que aceptó el camino que se le ofrecía. Y en el ínterin se dedicó a explorar otra posibilidad: una negociación conjunta con Brasil y México, por la que batallaría en los años siguientes, contra la sistemática resistencia de los bancos acreedores.

El primer plan económico de Alfonsín no sólo había ignorado la complejidad de esta situación externa sino las nuevas relaciones de poder en la economía. La concentración de recursos en pocos grandes grupos, la centralidad de la acumulación financiera en éstos y la rapidez con que podían bloquear cualquier iniciativa que los afectara fueron una sorpresa, no sólo para Alfonsín sino para buena parte de la dirigencia civil, que había estado alejada de la función pública e incluso del contacto con los actores económicos durante demasiado tiempo. Lo que esa dirigencia sabía de aquellos cambios la había convencido de buscar una democracia que "reequilibrara las cosas" y restableciera el "empate" entre el trabajo y el capital. Y la relativa ausencia de los grandes empresarios durante la transición, consecuencia de su momentánea falta de proyecto político, había despertado cierto optimismo al respecto. Optimismo que esos intereses concentrados desmintieron en cuanto la economía quedó de nuevo, igual que en 1975, al borde de la hiperinflación, y la carrera detrás del dólar puso en evidencia su poder de veto contra las políticas que no los satisficieran.

La crisis, que se prolongaba ya mucho más de lo que había sido habitual en las fases recesivas del pasado, provocó aún otros efectos. En primer lugar, volvió a alimentar los reclamos contra la inflación que habían acompañado el inicio del Proceso. Para quienes asumían ese reclamo, el problema no radicaba en lo que Martínez de Hoz había hecho sino en lo que no había logrado hacer, con lo que se dio nuevo impulso a los planteos antiestatistas: era necesario modernizar los servicios públicos y la actividad productiva en general (es decir, aumentar la inversión) para crecer y generar empleo genuino, y eso sólo podría lograrse reduciendo el "gasto público improductivo". Este rubro podía incluir, según el grado de radicalidad con que se abrazara esta perspectiva, desde el sobreempleo en empresas públicas y en la administración pública, pasando por los subsidios a todo tipo de actores económicos, hasta el conjunto del gasto en educación y salud. Lo cierto es que no faltaban datos que abonaran esta tesis: entre 1980 y 1987, la plantilla crecería el 15% en el estado nacional y nada menos que el 28% en los provinciales, mientras que en 1985 la inversión había caído al 10% del PBI, menos de la mitad que en 1980. Con todo, la opinión que alertaba sobre estos problemas seguiría siendo minoritaria en el electorado y en los grupos de interés, e incluso entre los empresarios, que preferían que el estado se endeudara para sostener los subsidios, el consumo y el empleo. Y si bien fue ganando adeptos en el partido oficial, lo hizo lenta y parcialmente.

### Un breve verano

Mientras tanto, lo que sí había ganado adeptos en las filas del radicalismo era la convicción de que controlar la inflación era la prioridad. Con esa idea asumió el cargo el nuevo ministro de Economía, Juan Sourrouille, quien pondría en marcha en junio de 1985 un programa articulado, basado en el congelamiento simultáneo de todos los precios de la economía, la instauración de una nueva moneda nacional —el Austral— y la desindexación de todos los contratos para detener la inercia inflacionaria que, como vimos, reproducía hacia el futuro la inflación pasada. El programa obtuvo el respaldo de Washington, que obligó al FMI a apoyarlo con nuevos créditos (por unos 4000 millones de dólares) y perdonar el incumplimiento de los anteriores. Eso, más la instrumentación por sorpresa del programa, le permitió a Sourrouille disminuir drásticamente los índices de precios: del 30,5% en junio cayeron a cerca del 2% entre octubre de ese año y febrero de 1986, los más bajos en una década. Se logró además evitar la caída en el nivel de actividad que suele acompañar a los ajustes, e incluso producir una moderada reactivación.

Esa reactivación se hizo sentir especialmente en la industria, que seguía siendo privilegiada por el gobierno: mientras se mantuvieron las retenciones a las exportaciones agropecuarias, las industriales recibieron nuevos subsidios. Ello supuso un acercamiento no sólo a la UIA sino a los "capitanes de la industria", ya que el gobierno apostaba a que esos grupos económicos repatriaran capitales para invertirlos en la producción de bienes exportables. A su entender, eso permitiría volver a crecer y al mismo tiempo pagar los servicios de la deuda externa. Sin embargo, ese salto exportador tardaría en producirse y, mientras tanto, el gobierno se enemistó con las entidades del campo, que iniciaron una serie de protestas contra las retenciones. Para colmo, estos tributos pronto se volvieron insostenibles debido a graves inundaciones y a la caída de los precios internacionales de los alimentos (entre 1980 y 1986 retrocedieron alrededor del 30%). Ése sería, finalmente, el talón de Aquiles del plan.

El Austral también mereció la desaprobación del peronismo: sus legisladores quisieron declararlo inconstitucional por haber sido decidido por decreto. Y además se opusieron a la desregulación del sector petrolero, objeto de una ya histórica discusión y recurso al que el gobierno apostaba para atraer inversiones externas. La CGT, por su parte, convocó a dos nuevos paros generales contra el acuerdo con el FMI y el

congelamiento de los salarios (pese a que durante 1986 éstos rondarían el 44% del PBI).

El hecho de que, mientras ocurría todo esto, la Cámara Federal avanzara en el juicio a los ex comandantes fue muy importante para el gobierno. Sus sesiones públicas, que mostraban a quienes poco tiempo atrás habían ejercido un poder sin límite sentados en el banquillo mientras en el estrado desfilaban las pruebas de sus crímenes, confirmaron la eficacia de las instituciones de la Constitución. Para algunos procesistas fue la gota que rebasó el vaso: hubo atentados contra locales radicales y de organismos de derechos humanos e incluso conatos de atentados contra la vida de Alfonsín. Pero esos ataques no lograron convencer a la opinión pública de que el gobierno estaba yendo demasiado lejos con los juicios, sino más bien de lo contrario: de que ellos eran necesarios para cortar definitivamente las alas a la violencia. Fue así que el consenso hacia las políticas oficiales aumentó. Y de paso se preservó la escena montada en 1983 y que más les convenía a Alfonsín y la UCR: una donde la democracia, que ellos encarnaban, enfrentaba a los remanentes autoritarios, que no sólo abarcaban a los militares procesistas sino también a buena parte del peronismo, ya fuera por "irresponsabilidad" o por nostalgia del poder perdido.

Esto, sumado al éxito inicial del plan Austral, bastó para que en las elecciones de renovación parcial de la Cámara de Diputados, en noviembre de 1985, el oficialismo retuviera la mayor parte de sus votos de 1983 (sumó el 43,2% en todo el país y triunfó en la mayor parte de las provincias peronistas). Sin embargo, los resultados indicaron también que perdía terreno, sobre todo a manos de fuerzas provinciales y de centroderecha y en los sectores populares, donde ni la recuperación parcial de los salarios ni otras medidas como el Plan Alimentario Nacional (PAN), que distribuía comida entre las familias indigentes, el Plan de Alfabetización o el subsidio por desempleo bastaron para desmentir la crítica que le hacían los peronistas: que su gobierno no tenía voluntad, capacidad o ninguna de las dos cosas para terminar con la exclusión. Para esos sectores desprotegidos no era tan evidente que el peronismo fuera un "resabio del pasado violento y autoritario"; en cambio aparecía, más generalmente, como el recuerdo de una época en la que habían vivido mucho mejor, y como el camino para volver a ella.

La victoria radical fue producto, más que de un avance propio, de la división de los peronistas en distintas listas. Esta división, a su vez, también dificultó que los radicales pudieran hacer pie más firmemente en los sectores bajos de la población. Y es que, entretanto, en el PJ se

habían agudizado los conflictos entre los "ortodoxos", alineados detrás de Lorenzo Miguel y del caudillo catamarqueño Vicente Saadi (un ex neoperonista que reemplazó al jefe de la UOM en la conducción del partido), y los "renovadores" como Antonio Cafiero, Carlos Menem, gobernador de La Rioja, y el porteño Carlos Grosso, que reclamaban democracia interna. Los renovadores presentaron listas propias en varios distritos, entre ellos la provincia de Buenos Aires, donde los cafieristas casi triplicaron los votos del PJ de Herminio Iglesias. Los esfuerzos de Alfonsín para regenerar a los actores no habían tenido eco en los uniformados, tampoco en los gremialistas ni en el empresariado. Lo encontraron precisamente allí donde no lo habían buscado: en el ala política del peronismo, gracias a los renovadores. Y, a raíz de ello, el gobierno tendría que lidiar con una competencia electoral cada vez más dura.

El freno a la inflación, la victoria parcial en las parlamentarias y la conclusión del juicio a los ex comandantes, que fueron condenados en diciembre (Videla, Massera y Agosti a reclusión perpetua; los demás a entre 6 y 20 años de prisión), inauguraron la época de gloria de Alfonsín. El presidente creyó entonces que "lo peor había pasado" y que había llegado el momento de concretar sus proyectos más ambiciosos. Así lo anunciaría en un extenso discurso pronunciado ante la convención de la UCR, en el que resumió sus planes para el país: modernización económica, ética de la solidaridad y democracia participativa, una versión socialdemócrata de los lemas justicialistas (soberanía política, independencia económica y justicia social) en la que confluían ciertas ideas de izquierda, el liberalismo político y la tradición "nacional y popular" del yrigoyenismo y el peronismo.



### **"Una democracia cargada de valores"**

Los intelectuales alfonsinistas que redactaron el "discurso de Parque Norte" para la convención radical, entre los que se destacaban los sociólogos Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero (cabales representantes de una izquierda que, de vuelta en el país tras el exilio, revalorizó la "democracia formal"), dieron letra e impulso a Alfonsín para que afiliara la UCR a la Internacional Socialista y concibiera su futuro asociado a la realización de una "democracia cargada de valores". Entre estos valores sobresalía, claro, la justicia social. Los renovadores les contestarían al poco tiempo con un planteo bastante similar, aunque se ocuparon de

descalificar el discurso oficial por "procedimentalista" y "posibilista". Como señala el sociólogo Juan Carlos Torre, otro importante asesor presidencial de ese entonces, el diálogo entre ambos sectores resultaba cada vez más difícil a medida que coincidían en sus definiciones y promesas, y se disputaban la posibilidad de ser la opción adecuada para realizarlas. ▀

Estos planes refundacionales incluían el traslado de la capital a la ciudad de Viedma, la reforma de la Constitución, la apertura al comercio y las inversiones extranjeras, la modernización del estado (se contemplaba la racionalización de personal y la privatización de algunas de sus empresas), de las relaciones familiares (leyes de divorcio, patria potestad compartida, etc.) y laborales. En este último terreno se trataría ahora de descentralizar el poder sindical y fomentar la cooperación entre éste y el empresariado, cambiando el eje en la batalla contra el "modelo" heredado: dado que cambiar la dirigencia había sido imposible, se pretendía inducirla a abandonar las prácticas coyunturalistas que reproducían una puja distributiva inflacionaria y cada vez más estéril. Esta posición encontró eco en el sector orientado por Triaca, que ahora se denominaba Los 15 (reunía ese número de grandes gremios de la industria y los servicios). También inclinado a la búsqueda de nuevas formas de acción y cooperación, Triaca había vuelto a tomar distancia de Miguel desde el inicio del plan Austral. Durante 1986 Los 15 participarían de la concertación de precios que el gobierno aplicó en la industria. Y ese vínculo se coronó, a comienzos de 1987, con la designación de uno de sus integrantes, Carlos Alderete, en la cartera de Trabajo. Este proceso sería interpretado por el vértice oficial, en particular por los colaboradores de Alfonsín que insistían en una política agresiva hacia el peronismo, como un paso decisivo para romper la unidad de esta fuerza y construir lo que llamaban el Tercer Movimiento Histórico —o la Convergencia Democrática, en versiones más moderadas (no mucho más moderadas, en verdad, porque seguían colocando a la oposición en el incómodo papel de ser representante del "atraso y el autoritarismo")—.

Las reformas anunciadas en Parque Norte, sin embargo, no dieron los resultados esperados. Salvo las referidas a las relaciones familiares, las demás se frustraron en el Parlamento o antes de llegar a él. Y es que la consolidación del gobierno y del régimen democrático lograda a fines de 1985 apenas alcanzó para darles un respiro. Las mayores amenazas que enfrentaban desde un principio, la militar y la inflacionaria, aguardaban al acecho para tomar revancha.



### Los planes de modernizar el sistema educativo

La educación pública experimentó tendencias contradictorias durante la primavera democrática. En las universidades se restableció el cogobierno y se repuso en sus cargos a muchos profesores perseguidos. También se recuperó la práctica de los concursos, en reemplazo de las designaciones discrecionales. Pero, con el paso del tiempo, hubo problemas para compatibilizar la masificación de las casas de altos estudios con la mejora de la calidad educativa. Y en ocasiones la autonomía se volvió una barrera defensiva de los claustros contra reformas necesarias. En cuanto al Congreso Pedagógico, convocado para debatir entre docentes, padres y autoridades la modernización de la enseñanza primaria y secundaria, tuvo resultados bastante pobres: los docentes, urgidos por problemas salariales, tendieron a actuar cada vez más como el resto de los gremios estatales, y su identidad como profesionales de la educación se diluyó poco a poco; y en cuanto a los padres, sólo se movilizaron los de escuelas católicas privadas, alentados por la jerarquía eclesíástica (ya enfrentada al gobierno por sus políticas para la familia y los juicios a los militares), para reclamarle al gobierno más subsidios y menos intervención. Esto revelaba algo más que fervor religioso: el deseo de sectores cada vez más amplios de que alguien proveyera los servicios que el estado era cada vez más incapaz de brindar. ▀

Que se frustrara la modernización económica obedeció tanto a la inestabilidad interna y las altas tasas de interés internacionales como a los precios excesivamente bajos de exportación de los alimentos (que en 1986 llegaron a estar un 40% por debajo de los de 1980). Pero también influyeron los errores de la gestión y el bloqueo impuesto por una coalición de intereses que prefería mantener las cosas como estaban, antes que emprender cambios que, a sus ojos, podían conllevar males todavía mayores. En un período de doce meses la CGT realizó otros cuatro paros generales. Los sectores del agro concretaron dos extensas protestas. Y los gobernadores de todos los partidos reclamaron insistentemente más recursos y siguieron aumentando su plantilla de empleados y distribuyendo créditos subsidiados a las empresas. El FMI volvió a mostrarse comprensivo con los incumplimientos del gobierno nacional y otorgó perdones por el desborde del déficit en tres ocasiones durante 1986. Advirtiendo esa situación, en abril el Ejecutivo decidió terminar el congelamiento y pasó a administrar un "deslizamiento" de precios, tarifas,

salarios y tipo de cambio con la intención de “patear para adelante” los problemas y cobrar a cada una de las partes su correspondiente cuota del impuesto inflacionario. Estimó que, si esa estrategia había funcionado durante años en el pasado, volvería a hacerlo ahora que se había evitado la “híper” y se volvía a tener una “inflación aceptable”. Pero los mecanismos indexatorios estaban demasiado aceitados. Y, para peor, abandonar la promesa de un control estricto de los precios redundó en una pérdida irreparable de credibilidad frente a la sociedad. Desde entonces el gobierno se vio sometido a una puja aún más potente por extraerle concesiones, que en poco tiempo daría por tierra con su idea de administrar el desequilibrio.

En lo atinente a la relación con las provincias, en marzo se había llegado a un acuerdo para que las transferencias de las recaudaciones de la nación fueran automáticas. Se esperaba que esta medida diera paso a una nueva ley de coparticipación que reflejara el hecho de que los distritos, desde 1976, administraban buena parte de sus servicios de salud, educación, infraestructura, etc. Pero, a raíz del descongelamiento, los montos acordados fueron quedando desactualizados por la inflación. Las provincias volvieron a ponerse en pie de guerra, y la nación a asignar partidas de ayuda discrecionales. En cuanto al sistema previsional, la situación era todavía más compleja. Hacía ya muchos años que las leyes de retiro eran incumplidas por la nación y las provincias; y las jubilaciones se actualizaban con retraso y en forma despareja. Los juicios previsionales se multiplicaron y la Corte Suprema exigió al estado que atendiera las demandas. Pero el gobierno siguió ganando tiempo: dictó una “emergencia previsional” y empezó a acumular una deuda que nadie supo decir cuándo terminaría de crecer.

Mientras la inflación retomaba impulso y superaba el 100% anual, Alfonsín hizo un nuevo intento por renegociar la deuda externa en forma conjunta con Brasil y México. Pero aunque avanzaron las tratativas para crear un Mercado Común del Sur con las nuevas autoridades democráticas brasileñas, los acreedores consiguieron desbaratar una vez más el “club de deudores”. Argentina sólo logró, desde fines de 1986, que los bancos y el FMI volvieran a hacerse los distraídos ante su retraso en el pago de los intereses.

De nuevo, mientras la economía se complicaba, Alfonsín enfatizó la importancia de continuar los juicios contra los represores. La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires se abocó a las “megacausas” de la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército. Otros juzgados del país la imitaron, pero la mayoría siguió demorando sus causas o esperando que

el Consejo Supremo las resolviera. Desde el Ministerio de Defensa, y en acuerdo con el jefe del Ejército —el general Héctor Ríos Ereñú, un lanussista que pretendía reflotar el “profesionalismo prescindente”—, se impulsó la idea de volver al plan original, esto es, aplicar el principio de “obediencia debida” para disculpar a todos o bien a la enorme mayoría de los oficiales en actividad. Al principio Alfonsín los avaló. Y de ello resultaron las Instrucciones a los Fiscales, que acotaron la definición de los “crímenes atroces y aberrantes” (limitándolos a los secuestros de bebés, robos y “excesos”, lo que seguía sin quedar muy claro qué abarcaba) y ordenaron encausar sólo a quienes no pudieran alegar obediencia. Pero, en cuanto se tuvo noticia de ello, la Cámara Federal de la Capital en pleno amenazó con renunciar y las protestas dentro del oficialismo se extendieron. Eso bastó para que Alfonsín anulara la medida, incluso antes de que los organismos de derechos humanos llegaran a movilizarse en su contra. En consecuencia, los juicios continuaron en forma tan despareja como hasta entonces.

La inquietud en los cuarteles aumentó. Cabía sospechar que el gobierno daba largas al asunto, para llegar en mejores condiciones a las elecciones de gobernadores y legisladores de septiembre de 1987. De ser así, y si lograba imponerse en esos comicios, nada le impediría seguir adelante. Por lo tanto, en las filas creció la desconfianza hacia la propuesta de esperar una solución, que hacía Ríos Ereñú y respaldaba el titular de Defensa, Horacio Jaunarena. Y ambos perdieron autoridad a medida que más oficiales se negaban a acatar las citaciones judiciales recibidas. En diciembre, finalmente, los funcionarios radicales llegaron a una fórmula salomónica: la Ley de Punto Final, que puso una fecha límite al inicio de los procesos para obligar a los jueces a encausar a los involucrados si había pruebas y responsabilidades, o bien a descartar las acusaciones y cerrar los casos. De esa manera se acelerarían y homogeneizarían los procesos y se disculparía al grueso de los oficiales en actividad, quitándoles motivos para solidarizarse con los que inevitablemente serían acusados. El Parlamento aprobó el proyecto. Y los miembros de la Cámara de la Capital Federal y la Corte Suprema en general lo aceptaron. Pero entre enero y febrero de 1987 los tribunales, incluso los hasta entonces más renuentes a avanzar, tal vez por temor a ser señalados como responsables de la impunidad, se lanzaron a emitir citaciones y autos de procesamiento que en pocas semanas involucraron a más de 300 oficiales, entre activos y retirados. El gobierno, que había estimado que hasta un centenar sería “tolerable” en los cuarteles, no supo qué hacer. Alfonsín anunció que habría otra ley correctiva, que

resolvería definitivamente la cuestión de la obediencia debida. Pero no se apuró en presentarla ni hizo explícito su contenido: era de sospechar que pretendía seguir ganando tiempo.



"No al Punto Final." Afiche de convocatoria a una manifestación contra esa ley en la ciudad de Rosario.

Los organismos de derechos humanos se movilaron contra el Punto Final, pero no pudieron hacer mucho. Estaban en gran medida a merced de lo que decidiera el partido oficial, pues los peronistas seguían divididos entre la denuncia de una "amnistía encubierta" y los reclamos por una amnistía abierta y generalizada que beneficiara tanto a los militares como a los jefes montoneros (quienes en el ínterin habían sido detenidos y enjuiciados). Por otro lado, las tensiones en el Ejército crecían, pero las otras dos fuerzas se mantenían ajenas al problema: los aeronáuticos, gracias al desarrollo del misil Cándor; los marinos, debido a los planes para comprar naves y reequiparlas. La inflación, entre tanto, volvió a descontrolarse y Sourrouille se vio obligado a un segundo congelamiento general de precios, que sería muy difícil implementar. El gobierno empezaba un año electoral decisivo apenas con medios para estirar las cosas y esperar que no se salieran totalmente de cauce.



### La teoría de los dos demonios

Durante 1986 el gobierno insistió con su "teoría de los dos demonios", según la cual la guerrilla era tan responsable como los militares por la violencia política. Esa actitud le mereció muchas críticas: no sólo por el número de víctimas y la crueldad de los crímenes cometidos por los militares, sino por la diferencia que suponía el uso del estado para violar los derechos de las personas. Los errores que se achacaban ahora a Alfonsín reflejaban los dilemas que había enfrentado desde el comienzo de su gobierno: ¿había consumido inútilmente su tiempo en un "autojuzgamiento" infructuoso?, ¿había centralizado demasiado el proceso judicial o no había puesto suficiente esmero en hacerlo?, ¿había concedido demasiado a la división de poderes, a una noción "liberal-republicana" de los derechos en cuestión y a la prioridad de la justicia sobre el resto de los valores e intereses colectivos, o no había sido consecuente con ella? ▀

### El ocaso: rebeliones militares e hiperinflación

La rebelión estalló el 14 de abril, en la Semana Santa de 1987. Como sucedía con frecuencia, un oficial del Ejército había desobedecido la citación de un juez. Pero esta vez las cosas no quedaron allí: varias unidades se amotinaron y los rebeldes se fortificaron en un sector de Campo de Mayo. El hecho no tomó totalmente desprevenido al gobierno: en un primer momento incluso lo consideró conveniente para demostrar que era necesario poner algún freno a los juicios. Pero pronto comprobó que la crisis iba demasiado lejos y debilitaba seriamente su autoridad: no sólo por el número de amotinados sino por la negativa de los demás oficiales a reprimirlos, y la advertencia de algunos de que no permitirían que nadie lo hiciera. Y aún más, con el motín cobró forma un movimiento muy amplio, hasta entonces latente, y un liderazgo, el del coronel Aldo Rico, que se inspiraba en la "gesta de Malvinas".

El motín no podía avanzar sobre el poder civil, pero le bastaba que no fuera posible desbaratarlo por las armas. Eso le dejaba al gobierno dos salidas: recurrir a la movilización popular para someter a los rebeldes o llegar a un acuerdo con ellos. Intentó hacer las dos cosas a la vez: movilizó a la ciudadanía, que indignada colmó día tras día las plazas de

todo el país, para acorralar a Rico y sus hombres, mientras ablandaba a los militares con la promesa de una ley de obediencia debida ya decidida. Pero éstos no se dejaron impresionar: sabiéndose aislados, exigieron el compromiso y el reconocimiento personal del presidente para aceptar rendirse. Si Alfonsín concedió finalmente estas condiciones, y se apersonó en Campo de Mayo, fue en parte por el riesgo de que un desborde en la manifestación que ya sitiaba el lugar provocara muertes, hecho que habría reabierto el escenario de polarización que pretendía cerrar. Lo hizo también porque subestimó el precio que lo obligaban a pagar, creyendo que, si lograba ofrecer una salida pacificadora a cambio de una ley que en última instancia se correspondía con sus metas originales, preservaría su rol moderador y el consenso necesario para sostenerlo. Como fuera, Alfonsín acudió a entrevistarse con Rico, quien, luego de repetirle sus exigencias, se rindió y quedó detenido junto con sus seguidores. De regreso en la Casa Rosada, el presidente habló ante una plaza colmada y confirmó el ánimo pacificador de su solución: reivindicó a los "héroes de Malvinas" que nutrían las filas de los rebeldes, recalcó que no había sangre en las calles, y cerró con un anuncio que habría que confirmar: "la casa está en orden".



El coronel Aldo Rico en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, al frente de los carapintadas. Archivo *Clarín*.

Este esfuerzo de Alfonsín por presentar las cosas como un triunfo no sólo suyo sino de la democracia fue torpedeado sin pérdida de tiempo por el propio Rico. Aunque detenido, dio una conferencia de prensa

en la que se presentó como el vencedor de la jornada: se arrogó ser la cabeza "del verdadero ejército" y quien reconciliaría "a las fuerzas del orden con el pueblo", y se embolsó la obediencia debida y el desplazamiento de Ríos Ereñú (pasado a retiro ante la evidente extinción de su autoridad). La consolidación del "movimiento carapintada" fue por tanto inocultable. Para colmo, al poco tiempo Dante Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, reclamaría no sólo amnistía sino un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por "haber derrotado a la subversión y haber hecho posible la democracia". Así, el barco de Alfonsín hacía agua por los dos flancos: su "solución" no era tal para quienes querían más juicios aunque estaban dispuestos a resignarlos a cambio de orden, ni tampoco para quienes deseaban orden ante todo y achacaban su falta a los juicios ya realizados o todavía en curso. Tanto si "había pacto" y se revelaba contraproducente, como si "no había pacto" debido a que Alfonsín ya no era confiable para los militares, el gobierno parecía ser ahora la verdadera causa de los problemas.

El segundo congelamiento, o "australito", también naufragó. Fue seguido, en marzo, por el ingreso de Alderete a la cartera de Trabajo, que no sólo supuso el abandono de las reformas laborales sino su reemplazo por leyes de paritarias, asociaciones profesionales y obras sociales que fortalecían el viejo modelo sindical. Tales concesiones, para peor, no refrenaron las presiones salariales: a poco de asumir, en flagrante contradicción del congelamiento, Alderete reclamó aumentos. No quedaron dudas de que sería un hombre de los gremios en el gobierno y no, como esperaba el presidente, una cuña útil para dividir a aquéllos.

En agosto Sourrouille logró finalmente un acuerdo con la banca acreedora, ablandada por el *default* que entretanto había dispuesto Brasil: habría siete años de gracia y dinero del FMI para cumplir con los vencimientos atrasados, pero no reducción de las tasas de interés ni del capital. Dado el acotado superávit comercial, era un arreglo insuficiente. La opción de imitar a Brasil, o mejor aún a Perú, cuyo presidente Alan García no sólo había repudiado la deuda externa sino nacionalizado el sistema financiero, ganó apoyo.

En este clima de opinión, con la inflación de nuevo en alza y la aprobación de la Ley de Obediencia Debida, el porcentaje que la UCR obtuvo en las elecciones de septiembre de 1987 podría estimarse satisfactorio (sumó el 37% de los votos, contra el 41% del PJ). Pero el cambio en la distribución de poder institucional resultó abrumador: perdió todas las gobernaciones, salvo las de Río Negro y Córdoba, mientras que el PJ sumó diecisiete.

Ese cambio dio lugar, en principio, a un hecho esperanzador y único en el período: un intento de los dos grandes partidos por acordar reformas en el Parlamento y evitar que la competencia entre ellos, que se intensificaría al aproximarse las elecciones presidenciales de 1989, alimentara la inestabilidad. Pero el intento fracasó a raíz de la interna del PJ. Antonio Cafiero, que había obtenido la gobernación bonaerense y, acto seguido, la jefatura del PJ legitimado por todas las facciones internas, creía tener asegurado el camino a la presidencia. De modo que no se desveló por el desafío que le planteó Menem, antes renovador y ahora aspirante a la primera magistratura como defensor de la más ortodoxa tradición peronista. Suponía que las internas contra el mandatario riojano serían un mero trámite. Y se dedicó a aventar el fantasma de los setenta de las mentes de los empresarios, las clases medias y los observadores externos, que aún desconfiaban de que el peronismo pudiera gobernar en un contexto de penurias fiscales como el que se vivía. Para convencerlos y evitar que ese contexto empeorara, Cafiero colaboró con el gobierno haciendo aprobar una ley de defensa, otra de coparticipación (en la que, para peor, Buenos Aires resignó parte de lo que hasta entonces le correspondía de los impuestos nacionales), y la limitación de la promoción industrial en provincias periféricas. También acordó las pautas de una reforma constitucional. A su vez, dejó en claro que alejaría a los sindicalistas de la toma de decisiones: redujo su peso en la conducción del PJ y rechazó la propuesta de Las 62 de compartir la fórmula con un candidato que les fuera afín.

La suma de todos estos factores configuró una oportunidad que Menem supo aprovechar, haciendo precisamente lo contrario que el bonaerense: denunció su mimetización con el alfonsinismo y su traición a los postulados del peronismo, respaldó la nueva ola de huelgas generales (hubo cinco entre fines de 1987 y 1988), y dio cobijo a los sindicalistas —en particular a Los 15, ya fuera del gabinete—. Contó además con cierta ayuda del gobierno, en cuyo seno algunos juzgaron más conveniente competir contra un candidato “impresentable” y no contra uno que se les parecía cada vez más. Sin embargo, lo decisivo fue el carisma del reelecto gobernador riojano, que le permitió descontar la ventaja que Cafiero le llevaba en términos organizativos e institucionales. Fue así que, en la primera elección directa de candidatos en la historia del peronismo, el 8 de julio de 1988, contra todos los pronósticos, Carlos Menem triunfó ampliamente.

A raíz de esto, el gobierno quedó expuesto a presiones de todo tipo, sobre todo en el frente económico. A fines de 1987, Economía había

dispuesto un tercer congelamiento, más efímero aún que el segundo. La inversión y la recaudación se derrumbaban. Y el deterioro de los salarios públicos minaba la ya escasa capacidad de gestión del aparato estatal. Ello impactó en docentes, técnicos, bancarios y ferroviarios: una masa de empleados que pasó a protagonizar los más duros reclamos sindicales. Se asumían como víctimas de una crisis terminal del estado, crisis de la que cada vez más usuarios, en cambio, los consideraban total o por lo menos parcialmente responsables. La opinión antiestatista se masificó. Sobre todo en las clases medias y altas, que se resentían con los servicios vetustos de transporte, teléfonos, educación y salud, o bien pagaban por otros privados en su reemplazo y creían injusto que el estado les cobrara impuestos por servicios que no usaban. De allí el éxito que tuvo la candidatura a la presidencia de Eduardo Angeloz, gobernador de Córdoba y referente de las opiniones pro empresariales en el radicalismo. Y de allí también que la UCR acompañara este giro sin protestar: parecía lo más adecuado para competir contra un populista casi grotesco.

De este giro resultaría el último esfuerzo antiinflacionario del gobierno radical: el Plan Primavera. Anunciado el 2 de agosto de 1988, su mayor innovación fue otorgar, por primera vez desde la transición, un rol preponderante a los empresarios, en particular a los “capitanes de la industria”, en el diseño y el sostenimiento de la política económica. El gobierno ya no contaba con mucho apoyo externo debido a que en abril había dejado de pagar, y ya no volvería a hacerlo, incumpliendo todos los acuerdos con los acreedores y el FMI (Reagan logró que el Banco Mundial otorgara nuevos créditos, pero el Fondo sólo aceptó enviar los recursos previamente prometidos). La colaboración de los grupos locales se volvió imprescindible, y además resultaba acorde con la coalición que buscaba construir el candidato radical, y con el nuevo enfoque oficial sobre los cambios necesarios: había que marchar hacia una economía de mercado lo antes posible porque el estado ya no podía fijar creíblemente ningún precio. La democracia renunciaba así a su promesa de reequilibrar las tensiones entre trabajo y capital, y asumía que sólo podría recuperar poder regulatorio tras haber estabilizado la economía en alianza con los actores sectoriales predominantes. Por lo tanto, el programa incluyó una amplia apertura comercial, la liberación de las tasas de interés y la promesa de hacer lo mismo con el tipo de cambio en abril de 1989. Mientras tanto, el mercado cambiario se mantenía desdoblado para que el Tesoro pudiera adueñarse de las divisas resignadas por haber eliminado las retenciones a las exporta-

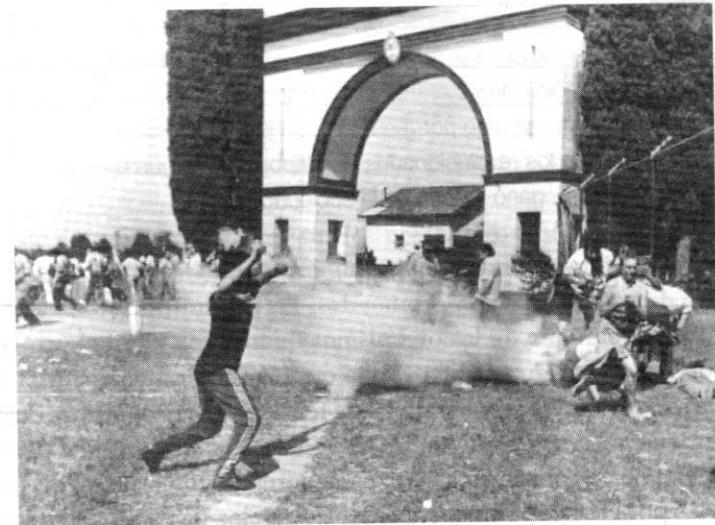
ciones (lo que no evitó que, en su última visita a la exposición anual de la Sociedad Rural, Alfonsín fuera abucheado). Y además, se lanzó la privatización parcial o total de varias empresas públicas (que el peronismo volvería a bloquear en el Senado).

El aspecto más débil del programa era el fiscal: se renunciaba a recursos seguros por retenciones, con la esperanza de que los empresarios liquidaran los dólares de sus exportaciones y el estado pudiera adquirirlos a bajo precio. Pero los exportadores, previendo que el tipo de cambio se liberaría a un nivel mucho más alto que el que ahora se les ofrecía, demoraron sus operaciones o dejaron sus dólares en el exterior. En el ínterin, en vista de los anuncios de Menem sobre una "generosa moratoria" y de la pérdida de autoridad del gobierno nacional, se propagó una fenomenal rebelión fiscal. Contra los esfuerzos de Angeloz, muchos empresarios se resignaron a la vuelta del peronismo al poder y buscaron protegerse o sacar ventaja anticipada de ello.

Una serie de acontecimientos políticos terminó de complicar las cosas. Se sucedieron varios estallidos sociales en capitales de provincia por demoras en el pago de salarios y su retraso respecto de la inflación, que aumentaron la tensión entre los gobernadores peronistas y el Ejecutivo nacional. Una feroz sequía afectó las exportaciones y la provisión eléctrica a las ciudades: los cortes de suministro se hicieron rutinarios y el ingreso de divisas cayó aún más. El frente militar volvió a complicarse. Caridi había logrado restablecer cierta disciplina en los cuarteles, a tal punto que, cuando el juicio contra Rico avanzó y el coronel rebelde volvió a amotinarse en enero de 1988, en Monte Caseros, su actitud no obtuvo mayor eco y debió rendirse ante la amenaza cierta de que fuerzas leales lo reprimieran. Desde entonces, ya fuera del Ejército, se dedicaría a promover el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin). Pero los carapintadas hallaron pronto un nuevo líder, el coronel Mohamed Alí Seineldín, y ocasiones más favorables para actuar. Seineldín recibió de Menem un cierto aval a sus propuestas para recuperar el "Ejército nacional". Y entendió que había que crear las condiciones para que el riojano cumpliera lo que prometía. La oportunidad se presentó cuando al coronel le fue negado su ascenso a general, a fines de 1988.

El 1º de diciembre estalló un motín que pocas horas después se focalizó en Villa Martelli, cuartel lindero con la Capital Federal. Los rebeldes dispararon contra los manifestantes que los repudiaban y produjeron varias muertes. Alfonsín tampoco había podido cumplir su promesa de que no habría sangre en las calles. Esta vez no fueron

las fuerzas leales las que frenaron la rebelión sino el propio Seineldín, que calculó que la demostración de fuerza bastaría para detener al "generalato liberal" y hacer que Menem cumpliera su palabra. La competencia inclemente entre los partidos estaba alimentando la inestabilidad y permitiendo que grupos facciosos sacaran ventaja, aunque, a la vez, la posibilidad de una pronta alternancia en el poder aseguraba que esas presiones no se desbordaran y que el grueso de los actores, incluso los menos afectos a la democracia, apostarían a las elecciones para lograr sus fines.



Rebelión militar en Villa Martelli, diciembre de 1988.

Archivo *La Nación*.

De todos modos, el gobierno ya no encontraría forma de controlar la situación, porque las malas noticias continuaron, como asimismo sus errores. El 23 de enero un grupo remanente del ERP, que actuaba bajo la cobertura de una organización juvenil y universitaria con estrechos lazos con organismos de derechos humanos, denominada Movimiento Todos por la Patria (MTP), asaltó el regimiento de tanques de La Tablada. La policía pretendió intervenir para detener al grupo atacante, pero grupos comando del Ejército se lo impidieron y lanzaron una feroz operación. Hubo 39 muertos, al menos tres desaparecidos y varias decenas de heridos.

### Ataque a La Tabada

Mientras algunos atacaban La Tablada, otros miembros del MTP distribuían volantes en las barriadas populares y llamaban a movilizarse para detener un golpe de estado supuestamente en marcha, ocupar los cuarteles del Ejército y encolumnarse hacia Plaza de Mayo con el objetivo de obligar a Alfonsín a hacer la revolución que "no se había animado a hacer" en Semana Santa. La autoridad del presidente quedó por completo dañada: debió ceder ante la presión militar y conformar un Consejo Nacional de Seguridad que permitía la intervención castrense en la seguridad interna. El daño fue aún mayor para el movimiento de derechos humanos, no sólo porque entre los guerrilleros figuraban varios activistas de esos organismos sino porque la versión procesista de que la convivencia pacífica con los revolucionarios era imposible, de que ellos eran "irrecuperables", ganó crédito en la sociedad. ▀

Días antes el Banco Mundial había anunciado que suspendía el envío de partidas de los créditos comprometidos. La administración de Reagan concluía y el enfoque de los organismos financieros sobre el problema de la deuda de América Latina estaba cambiando drásticamente. La carrera por las reservas se aceleró y el 6 de febrero el Banco Central dejó de vender divisas. La cotización del dólar comercial fue corregida, pero no lo suficiente para convencer a los exportadores. El gobierno, para colmo, perdió la poca cohesión que le quedaba: Angeloz logró que Sourrouille renunciara y que se concedieran aumentos de salarios de emergencia, que alimentaron aún más la corrida cambiaria; a mediados de abril lograría también que se cumpliera la promesa de liberar el tipo de cambio. La inflación, que se había acelerado, aunque bastante menos que el dólar, se disparó incontenible: en los siguientes meses alcanzó el 104,5%, 132% y 209%. Los ingresos públicos se evaporaron. La hiperinflación, a duras penas eludida en 1976 y de nuevo en 1985, finalmente había estallado.

Las elecciones del 14 de mayo arrojaron un 47% de las preferencias por Menem y un 37% por Angeloz. Alfonsín intentó un acuerdo de transición para detener la escalada de precios. Y ofreció, en caso contrario, el adelantamiento concertado de la entrega del poder. Pero no hubo consenso para una cosa ni otra. A fin de mayo y durante junio hubo por tercera vez sangre en las calles: en la periferia de las grandes ciudades se desataron saqueos de comercios y se registraron 14 muertes, fruto de la represión policial o la reacción de los propietarios.



Saqueos en San Miguel, 1989. Archivo *Crónica*.

En este contexto, Alfonsín y su vice presentaron sus renuncias al Congreso. El 8 de julio se concretó el traspaso del mando al peronista Carlos Menem. Así se cumplió el sueño de que un presidente democrático le entregara el poder a otro mandatario electo, algo que en líneas generales no sucedía desde 1928, y entre distintos partidos, desde 1916. Pero ello se lograba en condiciones políticas, económicas y sociales que estaban muy lejos de ser las más deseables.